



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 2181/2024

**“CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA
c/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Se presenta CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA impugnando la Resolución 34.745 del 30 de octubre de 2023 a través de la cual el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social le imputa infracción al artículo agregado sin número a continuación del 40 de la ley 11.683 (t.o. Decreto 821/98 y modificatorias) reclamándole la suma de \$ 17248,80 en concepto de multa, pues conforme el relevamiento y posterior verificación el organismo fiscal dice haber constatado incumplimiento al debido registro de alta respecto del trabajador Sergio Alberto Saudejaud a quien la impugnante denuncia como socio de la cooperativa y no dependiente suyo.

La recurrente afirma que la resolución adoptada resulta arbitraria, pues realiza una errónea apreciación de los hechos prueba y derecho aplicable ignorando su condición jurídica -de entidad cooperativa que no puede contar con dependientes sino con asociados- encontrándose su actuación regulada por la ley 20.337.

Concretamente expresa que la mera existencia de asociados que trabajan en la entidad de la cual forman parte, no puede llevar a concluir que existe relación laboral mientras no se pruebe que se pretende encubrir el trabajo subordinado tras una máscara societaria.

Por otra parte, refiere que la persona relevada ha aportado su declaración jurada reconociendo su carácter de asociada de la misma, lo que habla a las claras de la inexistencia de subordinación jurídica, económica y técnica. Entiende el apelante que le es aplicable la doctrina del Superior Tribunal de la Nación recaída en la causa “Lago Castro, Andrés Manuel c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda” sentencia del 24/11/2009, pues no ha habido una correcta evaluación de la prueba producida en la causa. Pide se revoque la decisión impugnada, dejando sin efecto la multa impuesta absolviendo a la sumariada.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Desde el punto de vista procesal entiendo que corresponde el análisis del recurso interpuesto pues por imposición del art. 44 de la ley 27.742, que modificó la anterior ley 19.549, el cumplimiento de una sanción pecuniaria no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial.

En cuanto al fondo el tema sometido a juzgamiento, he de destacar que las cooperativas de producción o trabajo son asociaciones de personas que se unen para producir bienes o prestar servicios y cuyo objetivo es mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales.

Se caracterizan por proteger la autogestión y la conducción democrática de la administración de la asociación y su finalidad es proporcionarles trabajo a sus asociados, los que reciben una parte de los excedentes que genera la cooperativa siempre en proporción al trabajo realizado por cada uno.

En otras palabras, la actividad de dichas entidades es económica como la de cualquier otra asociación productiva, pero desde el punto de vista histórico, exceden dicho objetivo dado que, al estar formadas por trabajadores, también pretenden elevar las condiciones socioeconómicas de éstos.

La idea que mueve a dichas entidades es reemplazar la figura del trabajador asalariado por el socio cooperativista, dueño del capital y del trabajo, inserto en una organización horizontal, igualitaria y solidaria. Se ha señalado que las citadas asociaciones se originan en el propósito de evitar la explotación del trabajo manual o intelectual del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo asalariado, para sustituirlo por el trabajo en común, mediante una aportación libre del trabajo de todos –técnicos, empleados y obreros- contribuyendo de tal manera a la obtención de beneficios en los que participan exclusivamente los que conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas en favor de la entidad. No se concibe, pues, la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o reconozca discriminación de cualquier tipo. No se la concibe tampoco guiada por un primordial espíritu de lucro, consagrada a la acumulación de capitales e intereses o gobernada por núcleos excluyentes, al modo de una empresa comercial que loca sin restricciones el trabajo de los individuos, allegándolos en relación de dependencia (ver CSJN, 24/11/09, “Lago c/Cooperativa Nueva Salvia Ltda”, Fallos: 332:2614).

Es por ello que, en principio, se entiende que en una cooperativa de trabajo genuina, la calidad de socio excluye la del trabajador dependiente lo que determinaría la inaplicabilidad de las previsiones del art. 27 de la LCT (Rubio y Piatti, “Recursos de la seguridad social”, p. 231; Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del Trabajo”, ps 203/4; CNTr. Sala I, 20//01, “Mendoza c/Coop. de Trabajo Patagónica”, DT 2001-B-2109; Sala III, 22/7/01, “Guerrero c/Castellini”, DT





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

2002-508; Sala V, 28/12/01, “García c/Coop, de Trabajo Lince”, LL 2002-D-275; Sala VI, 13/10/10, “Di Gregorio c/Coop. de Trabajo Cazadores Ltda.”, DT 2.011-9-2325”) pero las citadas cooperativas resultan entes permeables a situaciones de fraude laboral y con frecuencia se enmascaran bajo su estructura societaria, típicas prestaciones de carácter dependiente. Se ha entendido que si la cooperativa de trabajo actúa como simple proveedora de mano de obra en beneficio de terceros resulta alcanzada por la legislación laboral (ver Caubet, Amanda “Las cooperativas de trabajo. Un instrumento de fraude a la ley”, DLP 1999-XIII-85; CSJN, 10/10/17, “Pessina c/Luis Frisman y otros”, Fallos: 340:1414; CFSS., Sala II, 28/8/19, “Primer Corte Coop. de Trabajo Ltda c/AFIP”).

Lo anterior explica que el Poder Ejecutivo haya sancionado el decreto 2.015/94 cuyas directivas vedan la posibilidad que las cooperativas de trabajo, para el cumplimiento de su objeto social, provean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. Por otra parte, no cabe olvidar que, en el campo del derecho social, rige el principio de primacía de la realidad puesto que el contrato de trabajo es un contrato realidad fundado en los hechos objetivos apreciables y, en caso de discordancia, debe darse preferencia a los hechos que fija la base fáctica de aplicación del derecho y no a lo expresado en los instrumentos suscriptos por las partes (Pla Rodríguez, “Los principios del derecho del trabajo”, p. 313; García Martínez, “Derecho del trabajo y de la seguridad social”, p. 295).

En el caso a estudio, según resulta del estudio de las constancias administrativas acompañadas, se atribuyó la condición de trabajador del Señor Sergio Alberto Saudejaud designándose audiencia de descargo en los términos del art. 5º de la resolución n 655/03 para el día 1º de junio de 2023.

En dicha oportunidad, se acompañó una declaración jurada del Señor Saudejaud en la cual el nombrado manifestó encontrarse asociado a la entidad apelante desde el 19 de febrero de 2016 habiéndosele asignado el N° de asociado 18113, ser aportante al régimen de monotributo y haber cumplido distintos actos cooperativos tales como asistir a asambleas de asociados donde tuvo oportunidad de expresarse libremente teniendo voz y voto, haber tenido acceso al Consejo de Administración y haber percibido anticipo de retornos por la utilización de la estructura cooperativa, lo que torna verosímil su relato.

También obra entre la documentación acompañada dos cartas documentos. En la primera de las cuales el Sr. Saudejaud comunica que ha sido notificado de su aceptación como asociado de la cooperativa. En la segunda, renuncia a tal carácter. Asimismo, se acompañó copia del libro Registro de Asociados donde figura el Sr. Saudejaud.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

También obra en la causa documentación que refiere anticipos de retornos por los ejercicios 2016 y 2017.

Planteada así la cuestión y habiéndose constatado que la apelante es una entidad legalmente inscripta, en los términos del régimen de cooperativas, entiendo que lo resuelto debe ser dejado sin efecto ya que la presunción del art. 12 de la ley 19.549 (sustituido por el art. 33 de la ley 27.742) puede ser alterada por prueba contrario, y el hecho que, durante el curso de la inspección, el Señor Saudejaud no se identificara como socio de la cooperativa constituye un dato insuficiente como para justificar una condena punitiva. Ello atento a que es deber del Estado llegar a la verdad material de los hechos acaecidos y ejercitar con prudencia sus facultades sancionatorias a los fines de no violentar el art. 17 de nuestra Carta Magna.

Con base en lo anterior propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la sanción patrimonial aplicada. Las costas se impondrán en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión planteada y existir posiciones contrapuestas a su respecto (art. 68 2do. párrafo CPCCN).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero a la propuesta de mis colegas de Sala.

En virtud de lo expresado el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, 2º) Dejar sin efecto la sanción patrimonial aplicada, 3º) Imponer las costas en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión planteada y existir posiciones contrapuestas a su respecto (art. 68 2do. párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO
Prosecretario de Cámara

ALP.

